



## Zimbabue: el largo camino hacia el año cero

**L**as elecciones presidenciales, legislativas y locales del pasado 29 de marzo en Zimbabue, lejos de señalar la apertura de una nueva etapa histórica que permita iniciar la reconstrucción de una sociedad devastada, han profundizado la crisis en que el país se encuentra inmerso desde hace casi diez años. En el momento de escribir este artículo (mayo de 2008) los resultados de los comicios presidenciales no han sido ni siquiera anunciados –después de más de un mes de realizarse las votaciones–, la distribución de parlamentarios ha sido contestada por el partido gobernante y las autoridades han puesto en marcha una nueva campaña de violencia contra la oposición política y cualquier persona o institución sospechosa de haberla apoyado. Un análisis exhaustivo de la historia reciente de Zimbabue requeriría un espacio mucho más extenso del que un artículo puede proporcionar. La evolución del país desde su independencia hasta finales de los años 90 ya ha sido tratada en una amplia y excelente bibliografía,<sup>1</sup> y las perspectivas del futuro inmediato son, a día de hoy, totalmente inciertas y nos faltan los elementos más básicos para analizarlas (resultados electorales finales, situación real en las zonas rurales, etc). Por lo tanto, hemos decidido centrar nuestro trabajo en la búsqueda de las claves que permitan explicar la deriva autoritaria y violenta del régimen de Robert Mugabe desde 1997, con la esperanza de comprender mejor cómo y porqué el país ha llegado a la situación actual.

### ■ Los años 80 y 90: ¿un Estado modelo (o no tanto)?

Zimbabue (la antigua Rhodesia colonial) alcanzó su independencia en el año 1980, tras una larga y dura guerra que enfrentó al Gobierno de la minoría blanca, encabezado por el recientemente fallecido Ian Smith,<sup>2</sup> y las guerrillas nacionalistas de la Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) y la Zimbabwe African Peoples Union (ZAPU). De un modo parecido –y en cierta forma premonitorio– a lo que ocurriría años después en Namibia y Suráfrica, la independencia fue fruto de unas negociaciones, culminadas en el acuerdo de Lancaster House de 1979, que marcaban un punto de compromiso entre las aspiraciones nacionalistas

---

y los intereses de los blancos, y de los países occidentales. La ZANU-PF, bajo el liderazgo de Robert Mugabe, había ganado ampliamente las elecciones justo antes de la independencia con un programa nacionalista y de fuertes tendencias marxistas, pero el nuevo Gobierno, cumpliendo con los acuerdos firmados, impulsó una política de reconciliación con la comunidad blanca y de moderación en las decisiones económicas.

La Constitución aseguraba el derecho a la propiedad privada, establecía un sistema político multipartidista, y garantizaba el ejercicio de las libertades básicas: derecho de reunión, libertad de prensa, garantías judiciales, etc. Las empresas y las granjas en manos de los blancos quedaron mayoritariamente intactas y la política económica del Gobierno buscó una combinación del mercado y de la intervención estatal en sectores considerados esenciales, manteniendo o creando una cantidad considerable de empresas públicas. El funcionariado se multiplicó rápidamente y los servicios sociales se extendieron a una amplia capa de la población. Por ejemplo, los alumnos matriculados en la enseñanza primaria, que era gratuita, pasaron de 800.000 en 1979 a 2.300.000 en 1986, y en la secundaria de 66.000 a 537.000.<sup>3</sup> El desarrollo de la asistencia pública –que además disfrutaba de una reputación de calidad considerable en el contexto africano– combinado con la estabilidad macroeconómica hicieron de Zimbabwe un verdadero modelo tanto para los partidarios de una solución negociada al conflicto surafricano como para los defensores del socialismo que deseaban evitar las catástrofes experimentadas en Mozambique o Angola.

Esta enorme legitimidad interna y externa, sin embargo, no podía esconder una serie de tendencias preocupantes del régimen. La ZANU-PF y su líder provenían de una tradición política que difícilmente se podía calificar de democrática, y ya durante los años de la guerrilla habían dado muestras de su intolerancia hacia la discrepancia –interna o externa– y de su tendencia a intimidar a las poblaciones que no se plegaban a los objetivos políticos del movimiento.<sup>4</sup> Esta inclinación hacia el autoritarismo se manifestó de nuevo durante los años 80. El Gobierno, con el apoyo militar de Corea del Norte, llevó a cabo una campaña de represión feroz contra los antiguos guerrilleros de la ZAPU y sus supuestos simpatizantes entre la población de la provincia de Matabeleland. Las autoridades acusaban a la ZAPU, formada principalmente por individuos de la etnia ndebele minoritaria, de conspirar contra el Gobierno con la complicidad de la Suráfrica del *apartheid*. El resultado del conflicto fueron más de 20.000 víctimas,<sup>5</sup> principalmente civiles, y una fusión más o menos forzada de la ZAPU con la ZANU-PF en 1987, lo que convirtió a Zimbabwe en un Estado casi de partido único. Tras las elecciones de 1990, la oposición sólo disponía de 2 diputados en el Parlamento de Harare. Al mismo tiempo, la administración se iba llenando con miembros de la ZANU-PF, se multiplicaban los casos de corrupción y nepotismo a favor de la elite gobernante, y las autoridades se esfuerza-

---

ban por controlar las instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en 1981 presionaron a los líderes de las diversas fuerzas sindicales para que se agrupasen en el Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), que fue puesto bajo la dirección de Albert Mugabe (hermano del presidente) y entró en un período marcado por los escándalos, la corrupción y la ausencia total de críticas a las decisiones gubernamentales.<sup>6</sup>

Un comentario aparte merece la política de tierras de los gobiernos de Mugabe, por la importancia que esta cuestión ha tenido a lo largo de todas las fases de la historia de Zimbabwe.<sup>7</sup> La recuperación de las tierras ocupadas por granjeros blancos durante la época colonial fue uno de los puntos básicos de la movilización nacionalista de los años 60 y 70, y una de las promesas de la ZANU-PF a su base social, muy centrada en las zonas rurales. En 1980, unos 4.500 granjeros blancos poseían 15,5 millones de hectáreas, normalmente en las zonas más fértiles del país, y unas 700.000 familias africanas vivían en 16,4 millones de hectáreas de las antiguas Reservas (ahora rebautizadas Communal Areas, Cas) en los terrenos más marginales. Los acuerdos para la independencia garantizaban el derecho de los blancos a la propiedad, impedían el cambio de la Constitución durante 10 años, establecían que la tierra debía ser vendida voluntariamente y la expropiación se limitaba a casos de parcelas infrautilizadas. La compensación al granjero debía pagarse a precios de mercado, en divisas y de forma inmediata. Pese a estas condiciones restrictivas, el Gobierno inició una política de compra de granjas y de reasentamiento de campesinos africanos. Cuando los acuerdos constitucionales caducaron en 1990, se aprobó la Ley de Adquisición de Tierras de 1992, que facilitaba las expropiaciones. En 1998 se habían traspasado a manos africanas 3,6 millones de hectáreas, donde ahora residían 71.000 familias. Además, unos 500 granjeros negros habían comprado tierras comerciales de forma privada. Pese a errores en la planificación y la implementación de los reasentamientos, y a la concesión de granjas a miembros del Gobierno y el partido, los resultados de la reforma agraria eran bastante satisfactorios a finales de los años 90.<sup>8</sup> Y la administración había dedicado también importantes recursos al apoyo de la agricultura en las Cas, donde las producciones de maíz y algodón crecieron significativamente.<sup>9</sup> La combinación, razonablemente exitosa, del mantenimiento del poderoso sector agrario comercial, el reasentamiento de decenas de miles de campesinos y la creciente productividad de la agricultura comunal eran un elemento más de la visión de Zimbabwe como ejemplo de Estado modelo en África.

La evolución política y económica del país empezó a deteriorarse a principios de los años 90. La extensión de los servicios sociales, la mala gestión administrativa y el pésimo funcionamiento de las empresas estatales habían aumentado la deuda del Estado. Y las trabas burocráticas y los controles estatales de precios, importaciones y divisas habían ralentizado el crecimiento económico. En 1991, el Gobierno tuvo que acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial la

---

aplicación de un plan de ajuste estructural (conocido en Zimbabwe con las siglas ESAP). De acuerdo con el plan, se inició un proceso de privatización de compañías estatales, de liberalización de precios y del comercio, se devaluó el dólar zimbabuano (ZD) y se redujo el peso del sector público. El ESAP recortó la inflación y mejoró el funcionamiento de la economía, pero también provocó un aumento del coste de los alimentos, redujo la gratuidad de la educación y los servicios sanitarios, y el paro se incrementó hasta más del 30%. Además, su aplicación coincidió con una gravísima sequía en 1991-92.<sup>10</sup>

Las nuevas políticas aumentaron el descontento de la población con la administración de la ZANU-PF. En un clima económico difícil, las quejas por el autoritarismo y la corrupción gubernamentales eran cada vez más visibles. Entre 1994 y 1996 tuvieron lugar diversas huelgas en el sector bancario, en la construcción, en correos, en la sanidad y por parte de los funcionarios. El Gobierno respondió con una mezcla de represión y de aumento de los salarios. Las elecciones de 1995 fueron boicoteadas por la mayoría de la oposición.

### ■ La crisis 1997-2000

Las cosas empezaron a deteriorarse de forma acelerada a partir del año 1997.<sup>11</sup> Entre las múltiples protestas que hemos comentado en el párrafo anterior destacaron en ese año las manifestaciones de la Zimbabwe National Liberation War Veterans' Association (ZNLWVA) y su líder Chenjerai Hunswi (alias Hitler). Los veteranos de la guerrilla de los años 70, tradicionalmente ligados a la ZANU-PF, sentían que desde la independencia el nuevo Estado les había abandonado y marginado y, espoleados por el clima de protestas, reclamaban el establecimiento de pensiones y el acceso inmediato a tierras. El distanciamiento entre los veteranos y la ZANU-PF venía motivado también por las conclusiones de un informe oficial, que acusaba al liderazgo de la ZNLWVA de malversación de los fondos de ayuda recibidos hasta entonces. Acosado en muchos frentes, el Gobierno cedió y aprobó el pago de una compensación de 50.000 ZDs a cada veterano y prometió la reserva del 20% de las tierras de reasentamiento en el futuro para este colectivo. La compensación suponía un coste de casi el 2,6% del PIB del país, y para pagarlo se estableció una tasa especial. Estas medidas provocaron la caída inmediata de la cotización del ZD y una fuga de capitales. La población, indignada por el nuevo impuesto y la pérdida de poder adquisitivo causada por la devaluación, redobló sus protestas. Y el ZCTU, bajo el liderazgo de Morgan Tsvangirai, convocó una huelga general seguida masivamente. El Gobierno se vio obligado a retirar la tasa.

En el mismo momento se anunció la voluntad de expropiar 1.471 granjas comerciales, teóricamente propiedad de absentistas y extranjeros, o cercanas a zonas co-

---

munales. Los granjeros respondieron acudiendo a los tribunales de forma masiva, y la comunidad de donantes advirtió al Gobierno contra acciones apresuradas y criticó la falta de transparencia y planificación en la selección de las granjas. Al año siguiente, Mugabe decidió intervenir militarmente en el conflicto de la República Democrática del Congo,<sup>12</sup> lo que provocó un nuevo choque con las instituciones financieras internacionales, una nueva crisis económica por el coste de las acciones en el Congo, y las protestas de la sociedad civil por las pérdidas humanas y la sospecha de la implicación de miembros del Gobierno y del Ejército en el saqueo de los recursos naturales congoleños. Diversas entidades de la sociedad civil crearon entonces la National Constitutional Assembly, que pretendía impulsar cambios en la Constitución y eliminar sus aspectos más autoritarios. A la vez, impacientes por la lentitud del proceso de adquisición de tierras, algunos veteranos empezaron a invadir granjas en ciertos distritos. En 1999, el Gobierno rompió las negociaciones con el FMI.

En septiembre de 1999, el ZCTU votó por la formación de un nuevo partido político, el Movement for Democratic Change (MDC), dirigido también por Tsvangirai. Además del apoyo sindical, el MDC pronto sumó las simpatías de las ONG, los estudiantes, la mayoría de las poblaciones urbanas y –a medida que la situación en las granjas empeoraba– los granjeros blancos. El crecimiento del MDC fue espectacular y se plasmó en las dos consultas populares que tuvieron lugar en el año 2000. En febrero, el Gobierno organizó un referéndum que promovía el cambio de la Constitución con el objetivo anunciado de facilitar la expropiación de tierras, pero también implicaba el refuerzo de los poderes presidenciales. Ante la sorpresa generalizada, el no defendido por la oposición y las entidades cívicas, resultó ganador. Inmediatamente, grupos de veteranos y de la Youth League (YL) de la ZANU-PF (junto con elementos del campesinado que actuaban espontáneamente) ocuparon 400 granjas. Y en junio, en las elecciones legislativas el MDC obtuvo 57 de los diputados electos, frente a 62 de la ZANU-PF.<sup>13</sup> La oposición había arrasado en las ciudades, Matabeleland y, por primera vez desde la independencia, había logrado el voto de centenares de miles de shonas, el grupo étnico mayoritario y teóricamente incondicional de la ZANU-PF. Por entonces, incitados por Hunswi y ante la pasividad y complicidad de las autoridades, los veteranos y la YL habían entrado en 1.500 granjas.

En ese momento, Mugabe y la elite gobernante en Zimbabue se encontraban ante una disyuntiva. Podían aceptar la progresiva popularidad de la oposición política, mantener las limitadas reglas de juego democrático que habían prevalecido en Zimbabue hasta entonces, modificar su línea política y económica para intentar recuperar la legitimidad perdida, y arriesgarse a perder definitivamente el poder en las elecciones presidenciales previstas para el año 2002. O podían enrocarse en sus posiciones, aumentar el aparato represivo y hacer inviable por medio de la violencia la

---

victoria del MDC. La opción escogida fue la segunda. La dirección de la ZANU-PF llegó a la conclusión, probablemente acertada, que, en un clima de libertades mínimas y en unas elecciones razonablemente libres, la oposición accedería a la presidencia en 2002. Esta eventualidad no sólo les apartaría de la dirección del Estado, sino que pondría fin a la capacidad de acumulación de recursos que la elite del Gobierno, el Ejército y el partido había estado llevando a cabo desde la independencia. La clase dirigente acumulaba todos los cargos políticos y administrativos de relevancia, dirigía las compañías paraestatales, monopolizaba los contratos gubernamentales, aprovechaba sus contactos en la ZANU-PF para expandir sus negocios privados, y estaba implicada en la explotación de los recursos en la RDC como resultado de la intervención militar en ese país. Eran demasiadas cosas para poner en juego. Y además, una posible expropiación masiva de las granjas comerciales abría un nuevo ámbito a la adquisición de recursos por parte de los sectores con buenas relaciones con el poder. Como indica Timothy Scarnecchia: «La elite política y económica zimbabuana usó la violencia de los veteranos y las milicias para proteger y expandir su capacidad para acumular y también para defender su *derecho* a acumular». <sup>14</sup>

### ■ Invasiones y represión

En el contexto de lo comentado en párrafos anteriores se debe situar la campaña de invasiones de granjas comerciales y de violencia generalizada en las zonas rurales que se desarrolló entre los años 2000 y 2002. La ocupación de las tierras de los blancos pretendía ofrecer un punto de legitimidad al régimen, justificar la represión que se iba a extender a todas las capas de la sociedad, impedir el voto de los centenares de miles de trabajadores agrícolas –que eran percibidos como simpatizantes de la oposición– y ofrecer las propiedades ocupadas a la elite gobernante.

Durante este período, las autoridades impulsaron la Fast Track Land Reform, que incluía el traspaso de prácticamente todas las granjas comerciales a campesinos africanos sin pagar compensación por la tierra expropiada: sólo se pagaba por las «mejoras» realizadas en la misma (edificios, cercas, etc). En un proceso caótico y violento, fueron asaltadas miles de granjas, asesinados algunos granjeros y decenas de trabajadores, fueron desplazados muchos trabajadores de sus zonas de residencia hasta entonces, fueron saqueados equipamientos y cosechas y fue robada y sacrificada por los invasores una gran cantidad de cabezas de ganado. <sup>15</sup> En 2001, la nueva Rural Land Occupiers Act impedía la expulsión de los ocupantes de granjas, y el Gobierno, de forma sistemática, ignoró todas las órdenes judiciales que declaraban ilegales las invasiones y requerían la retirada de quienes las habían realizado. <sup>16</sup>

Al mismo tiempo, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas legislativas que le permitían limitar de forma radical las actividades de la oposición y legalizar

---

---

las acciones represivas del régimen. La Public Order and Security Act reforzaba los poderes policiales y el control de movimientos y reuniones de la población, una nueva ley de ciudadanía dejaba sin nacionalidad y sin voto a centenares de miles de zimbabuanos de origen europeo, asiático y de los países africanos vecinos (muchos de ellos, trabajadores en las granjas desde hacía décadas), y las libertades de prensa y de opinión eran recortadas de forma drástica. Todas estas medidas, junto a las irregularidades en el proceso electoral, consiguieron el objetivo deseado: en los comicios presidenciales de 2002, Robert Mugabe resultó vencedor por un estrecho margen.<sup>17</sup>

La campaña del Gobierno, sin embargo, no iba a terminar aquí. La oposición aún tenía una importante fuerza en el Parlamento y en los ayuntamientos, y había denunciado los resultados presidenciales en los tribunales. Los países occidentales se negaron a aceptar las elecciones como válidas e impusieron sanciones económicas y de movimientos a los dirigentes zimbabuanos, el país fue suspendido de la Commonwealth y las protestas desde muchos sectores de la sociedad civil se multiplicaron. El desafío al régimen seguía. Y el reparto de las propiedades ocupadas en los años anteriores sólo había empezado. El camino iniciado en el año 2000 ya no tenía retorno.

---

## ■ La ofensiva política e ideológica

---

Desde el año 2002 y hasta el día de hoy, el aparato represor del régimen ha intentado minar todos los campos de actuación de la oposición política y desmontar cualquier centro de poder o influencia autónomo del Gobierno y el partido. Todos los ámbitos de la vida pública e institucional han sido afectados. El poder judicial fue gradualmente sometido a los dictados del Ejecutivo, y los jueces considerados independientes fueron intimidados o castigados hasta que abandonaron sus cargos. La prensa fue sometida a una legislación draconiana que, entre otras cosas, ha impedido el trabajo de la mayoría de corresponsales extranjeros, y en 2003 el único diario independiente, el Daily News, fue cerrado. Las ONG y otras entidades de la sociedad civil fueron perseguidas y en abril de 2007, el Gobierno derogó todas las licencias de actuación de las ONG, acusándolas de trabajar «para derrocar al Gobierno». <sup>18</sup> En Pascua de 2007 los obispos católicos firmaron una carta criticando la dictadura y las milicias progubernamentales empezaron una serie de ataques contra los católicos. <sup>19</sup>

Toda esta represión ha venido acompañada de una campaña de propaganda intensa y sistemática, que busca reforzar desde el punto de vista teórico la construcción de un Estado completamente subordinado a los dictados de la ZANU-PF. Las autoridades y sus aliados en el ámbito intelectual no se han cansado de repetir que



---

la ZANU-PF es la única formación legitimada para gobernar el país.<sup>20</sup> Su papel como movimiento de liberación anticolonial les otorga este derecho, de forma aparentemente perpetua. Evidentemente, se hace una lectura de la guerra de guerrillas de los años 60 y 70 completamente tergiversada, borrando cualquier tipo de abusos perpetrados por la ZANU-PF y condenando a prácticamente cualquier otro actor político de aquellos años. A partir de aquí, toda crítica contra el Gobierno es considerado un acto «traición» y una venta de los intereses del país en beneficio de Occidente, el «imperialismo» o los nostálgicos del período colonial. En este sentido, el proceso de expropiaciones violentas de granjas es explicado como un paso más en la «liberación» definitiva del país, y quienes lo cuestionan son tildados de defensores de los granjeros blancos y de la perpetuación del colonialismo.

La ideología oficial, de hecho, acaba excluyendo de la «verdadera» ciudadanía o del derecho a intervenir en los asuntos del país a casi toda la población. No hace falta decir que las tesis oficiales son claramente racistas y no contemplan la posibilidad que los blancos puedan ser ciudadanos de pleno derecho. Son «colonos» que tarde o temprano deberán «regresar» a su país de origen. También son excluidos los centenares de miles de trabajadores de las granjas, que tienen el doble estigma de ser de origen extranjero (aunque sea desde hace dos o tres generaciones) y de haberse mostrado contrarios a las invasiones. La mayoría de residentes urbanos y los jóvenes son acusados de no haber participado en la guerrilla, y por tanto no se han «ganado» el derecho a dirigir el país. El MDC es retratado como una suma de todos estos elementos ilegítimos, y como un «títere» de las potencias occidentales. Todas las entidades críticas, desde ONG a asociaciones profesionales, pasando por los sindicatos –de base mayoritariamente urbana– son simples instrumentos de Occidente o defensores de valores «extranjeros» a la tradición africana, como la democracia o los derechos humanos.

Una muestra especialmente trágica de esta doble campaña de represión política y dominio ideológico la podemos encontrar en el sistema educativo.<sup>21</sup> Zimbabue disfrutaba hasta finales de los años 90 de un prestigio considerable en este ámbito, al disponer de una educación primaria y secundaria que llegaba a la gran mayoría de la población, con un nivel de calidad destacable, de grupos editoriales independientes, y de la Universidad de Zimbabue (UZ), donde trabajaban académicos de relieve y se estaban realizando estudios innovadores sobre la historia del país. A partir del año 2000, e impulsado por intelectuales ligados al régimen como Stan Mudenge, Jonathan Moyo, Ibbo Mandaza y Tafataona Mahoso,<sup>22</sup> se inició un proceso de revisión de las estructuras educativas. Al nivel de las escuelas, en 2002 se introdujo un nuevo programa de historia elaborado sin consultar a maestros ni a la UZ, que se basaba en el recorte de la historia internacional y la concentración en la historia de Zimbabue, se apostaba por la memorización y se marginaba el análisis de los hechos y las fuentes. Tanto en las escuelas como en la UZ, se imponía la



---

«historia patriótica», defendida como una forma de «memoria» africana contra la historia académica, centrada de forma exclusiva en la historia política, eliminando las referencias a las ciudades y a la clase obrera, y glorificando el papel de la ZANU-PF. En los últimos años la UZ ha sufrido enormemente por esta coacción ideológica, por la caída de los recursos financieros y por la marcha de muchos de los profesores.

El aspecto más negativo de esta política educativa se ha desarrollado en las escuelas. Los maestros son considerados como un grupo especialmente sospechoso de simpatizar con la oposición. Para la ZANU-PF, han sido «contaminados» por su formación en la UZ, y ellos y los padres han fracasado en la transmisión de los valores «patrióticos» necesarios. En los últimos años, el colectivo de enseñantes ha sufrido de forma intensa la represión y la intimidación de las milicias de veteranos y de la YL. Se han establecido Campos de Jóvenes, donde los alumnos son «instruidos» por veteranos y cargos de la ZANU-PF e instigados a intimidar y desobedecer a sus padres y maestros. Los veteranos también han pasado a controlar el acceso a los Colleges de preparación de maestros, para seleccionar a los candidatos que se creen «apropiados».

---

## ■ La ofensiva urbana

---

Otro ámbito donde la represión del régimen ha sido especialmente dura es en las ciudades.<sup>23</sup> Ya hemos comentado que, desde los años 90, en los principales núcleos urbanos estaba creciendo el descontento con la gestión de la ZANU-PF, el funcionamiento cada vez más ineficiente de los servicios municipales, el acaparamiento de los cargos locales por parte del partido, y la corrupción extendida. La crisis de 1997, que disparó la inflación y hundió el poder adquisitivo de los trabajadores fue el detonante de más protestas y del apoyo masivo al MDC. En 2000, dos tercios de los votos urbanos fueron contrarios a la reforma constitucional apoyada por el Gobierno, y en las elecciones de ese año y 2002 el MDC arrasó en las ciudades y obtuvo las alcaldías de Harare, Bulawayo, Mutare, Chegutu, y Masvingo.

En aplicación de la teoría que convierte a los residentes urbanos en «traidores» y les niega las credenciales ligadas con la participación en las guerrillas, el Gobierno y en especial el ministro de Gobierno Local, Ignatius Chombo, pusieron en marcha un plan para recuperar el control de las ciudades. Los nuevos alcaldes del MDC fueron amenazados e intimidados, y el ministro se negó a aprobar las medidas acordadas por los ayuntamientos –como las tarifas de los servicios, los presupuestos o los cambios de personal. En 2004 se convirtió a Bulawayo y Harare en provincias, de forma que el Gobierno ahora nombraba dos gobernadores que se encontraban por encima de los alcaldes. Finalmente, en 2004 se echó de su cargo al alcalde de

---

Harare, Elias Mudzuri, y se nombró una comisión no electa para regir la ciudad. Lo mismo ocurrió poco después en Mutare y Chegutu.

En un intento final por controlar los centros urbanos y castigar a sus habitantes por su apoyo al MDC, entre mayo y julio de 2005 el Gobierno puso en marcha la Operación Murambatsvina o «Limpiar la Suciedad».<sup>24</sup> Consistió en una campaña masiva y acelerada de destrucción de alojamientos informales y de eliminación de las actividades económicas que el Gobierno consideraba «ilegales»: prostitución, venta ambulante, mercados no registrados, huertos urbanos, etc. Decenas de miles de casas o cabañas fueron destruidas, muchas veces junto con las pertenencias de sus habitantes, diversos mercados fueron cerrados y centenares de miles de personas quedaron sin hogar. El gobierno pretendía que «regresasen» a sus zonas rurales de origen, pese al hecho evidente que la mayoría habían emigrado a la ciudad muchos años atrás o ya no disponían de tierra o familiares en el campo. Algunos sí han sido desplazados fuera de las ciudades, pero la mayoría han seguido allí. Las consecuencias de la Operación Murambatsvina han sido devastadoras: miles de personas perdieron su medio de vida (comercio informal, pequeños establecimientos como peluquerías o bares, el subarrendamiento de sus casas, etc); se ha producido un aumento de la mortalidad al encontrarse mucha gente obligada a dormir a la intemperie o por la interrupción de los tratamientos médicos que seguían; el acceso a alimentos se ha desplomado al perderse las fuentes de ingreso a la vez que los huertos urbanos.

---

### ■ La ofensiva económica

Aun más que por todos estos ejemplos de represión, la vida de los zimbabuanos se ha visto afectada por los resultados de la política económica del régimen. Aquí no podemos analizar con detalle las múltiples consecuencias en todos los sectores de las medidas tomadas desde el año 2000, nos limitaremos a los aspectos más relevantes. Aunque los datos no son siempre plenamente fiables, debido a la escasez de estadísticas o a los cambios casi diarios, la magnitud de las cifras es tal que, aunque los datos finales resultasen ser la mitad de los que aportamos, su repercusión sobre la economía seguiría siendo catastrófica.

Sin duda, el aspecto más destacado de la ofensiva económica del Gobierno han sido las confiscaciones de las granjas comerciales.<sup>25</sup> En el año 2005 se decretó que toda la tierra del país pasaba a ser propiedad del Estado, y actualmente quedan unos pocos centenares de granjeros blancos aun en sus tierras, normalmente operando a un nivel productivo muy mermado. Unas 4.000 granjas han sido ocupadas, normalmente de forma violenta. Una parte ha sido repartida entre campesinos africanos, a la vez que muchas propiedades han pasado a manos de miembros del Go-

---

bierno, del Ejército, del Parlamento, de la ZANU-PF, de hombres de negocios ligados al régimen o de líderes de los veteranos. En ambos casos, los resultados han sido pésimos. En muchas ocasiones, la expulsión violenta de los granjeros estaba acompañada del saqueo de sus propiedades, el robo del ganado y la destrucción de la maquinaria, dejando la granja en unas condiciones productivas desastrosas. Cuando los beneficiarios eran altos cargos políticos o administrativos, frecuentemente se trataba de absentistas que residían en la ciudad y que carecían de los conocimientos o el interés suficiente para optimizar la gestión de sus granjas. Cuando eran campesinos, no habían recibido servicios de acompañamiento una vez instalados en las granjas, y se habían encontrado sin fertilizantes, ganado suficiente, maquinaria, semillas, o consejos sobre como usar unas tierras que, con frecuencia, se dedicaban a producciones altamente tecnificadas y complejas (tabaco, flores, horticultura, ganado de pedigrí, etc.). Buena parte de las tierras ocupadas están ahora fuera de uso.

Las consecuencias económicas y sociales han sido nefastas. En 1998, la agricultura (en buena parte gracias a la aportación del sector comercial) proporcionaba entre el 15 y el 20% del PIB de Zimbabue, el 40% de sus ingresos por exportación y se calcula que el 60% de la industria dependía del sector agrario (empresas lácteas, de conservas, de cigarrillos, de vehículos y maquinaria agrícola, etc.).<sup>26</sup> En el año 2002-2003, la cosecha de cereales era del 40% de la media de los cinco años anteriores; la producción de maíz en las granjas comerciales pasó de 810.000 toneladas en el año 2000 a 80.000 en 2003; la producción de tabaco era de 230 millones de kilos en 2000, y 80 millones en 2003.<sup>27</sup> Desde el año 2000-2001 el país vive en un estado de crisis productiva permanente y, aunque las cifras han variado cada año, las Naciones Unidas calculaban que en 2008 un tercio de la población necesitará la ayuda alimentaria internacional.<sup>28</sup> La situación es tan crítica que muchos beneficiarios han tendido que vender las pocas herramientas y cabezas de ganado que tenían o habían recibido del Gobierno para poder pagarse los alimentos o la escuela de sus hijos.

Por si esto fuera poco, en el año 2000 había unos 350.000 trabajadores residiendo en las granjas (junto a sus familias el número de personas residentes podría llegar a los dos millones) que, por razones económicas y políticas, no han sido los beneficiarios del reparto de tierras.<sup>29</sup> Esto ha significado que, en 2003, por los menos 200.000 trabajadores habían perdido sus lugares de trabajo, no habían recibido indemnizaciones (los granjeros estaban huidos o arruinados) y, junto con su empleo, se habían quedado sin lugar de residencia. Algunos se refugiaron en los suburbios de las ciudades (de donde muchos han sido expulsados posteriormente en la Operación Murambatsvina), y otros se quedaron como empleados de los nuevos propietarios, normalmente en unas condiciones laborales peores a las anteriores. Al marchar de las granjas, además, muchos trabajadores han perdido el acceso a su gana-

---

do y sus huertos, y a las escuelas y clínicas que se encontraban en las granjas (y eran parcialmente financiadas por los granjeros).

El hundimiento de la agricultura comercial arrastró a los demás sectores de la economía zimbabuana. Las empresas que dependían de la agricultura como fuente de suministros o como clientes se colapsaron. Las medidas económicas del régimen y sus pésimas relaciones diplomáticas con Occidente provocaron la caída en picado de las inversiones (pese a que, contrariamente al discurso de la ZANU-PF, no existen sanciones económicas contra el país). El número de personas que perdieron su puesto de trabajo es incontable, y el paro ronda el 80%.<sup>30</sup> El sector minero, por ejemplo, ha pasado de emplear a 75.000 personas en 1997 a tan sólo 35.000 en 2007, y gran parte de los cuadros más cualificados han emigrado. La producción de oro es actualmente el 25% de la que tenía lugar en los años 90.<sup>31</sup> La ocupación violenta de las granjas supuso también la caza furtiva de la mayoría de los animales salvajes que vivían en ellas; una parte de los granjeros se habían dedicado a criar y proteger fauna salvaje para atraer a turistas. Los altos cargos que han heredado estas granjas han liquidado a los animales o han abusado de las cuotas de caza para trofeos que el Gobierno otorgaba anualmente a sus antiguos propietarios. Algunos datos apuntan a que el 60% de la fauna del país ha sido eliminada, incluyendo el 98% de la que residía fuera de los parques nacionales. Además de destruir el patrimonio biológico de Zimbabue, esto ha colaborado en la caída en picado del turismo.<sup>32</sup>

La crisis económica provocó la devaluación masiva del dólar zimbabuano, que ha perdido prácticamente todo su valor real, y la inflación está actualmente por encima del 160.000%. El Gobierno respondió manteniendo una tarifa oficial de cambio de divisas completamente artificial y estableciendo controles sobre los precios de muchos productos. El resultado de estas medidas ha sido destructivo: se ha creado un mercado negro de divisas que ofrece monedas occidentales al cambio real, y que ha quedado en buena parte en manos de la elite gobernante, que obtiene divisas al cambio artificialmente barato marcado por las autoridades y las revende ilegalmente al cambio real. El control de precios ha provocado la escasez de una gran variedad de productos puesto que muchas empresas, ya afectadas por la crisis y por la obligación de pagar sus importaciones en divisas a precio real y a depositar sus ingresos en la Reserva Nacional donde son convertidos en moneda local al cambio oficial, no podían soportar las ventas a los precios fijados por el Gobierno y preferían dejar de fabricar.

Las autoridades empezaron a obligar a los campesinos a vender su ganado a precios por debajo del mercado para poder suministrar carne a los consumidores.<sup>33</sup> En repetidas ocasiones, los productos vendidos al precio oficial eran acaparados por personas vinculadas al régimen, que las revendían en el mercado negro por canti-

---

dades mucho mayores. A principios de 2007, la falta de productos esenciales fue tan grande después de una ofensiva gubernamental contra muchos comercios que se negaban a vender a los precios regulados, que en agosto de ese año algunos controles tuvieron que ser relajados. A principios de 2008, el valor del ZD era tan bajo y las cantidades de billetes necesarios para cualquier actividad o intercambio eran tan exorbitadas que se produjo una crisis bancaria al no ser capaces las entidades financieras de satisfacer la demanda de billetes.

Todos los indicadores de desarrollo y bienestar del país se han desplomado. En 2003, se calculaba que el 72% de los hogares en Harare eran «pobres». Las tasas de mortalidad infantil y de mujeres fallecidas en partos se han doblado en la última década, y la esperanza de vida ha caído hasta los 37 años.<sup>34</sup> La emigración se ha convertido en un fenómeno masivo, y algunas estadísticas indican que el 25% del total de la población está viviendo en el extranjero.

Es de destacar el hecho de que la crisis económica ha eliminado prácticamente a la clase media que se había desarrollado en los años 80 y 90. Sus miembros han sufrido el colapso de sus ingresos y la represión especial del régimen que, como hemos comentado, los consideraba «desafectos». Para la dirección política del país, las clases medias eran un peligro potencial por su elevado nivel educativo, sus puestos de trabajo en empresas privadas no dependientes del patronazgo de las autoridades, o por su participación en asociaciones cívicas y profesionales. Si bien el fenómeno migratorio ha alcanzado ahora proporciones masivas, la fuga de trabajadores cualificados, universitarios, profesionales liberales, etc, ha sido especialmente destacada y dañina para el país. Para el Gobierno, las consecuencias no han sido tan malas: un sector proclive a apoyar a la oposición ha sido desmantelado (en Zimbabue no existe la posibilidad legal del voto por correo) y las divisas que los emigrantes envían a sus parientes en el país han mantenido una parte de la economía a flote.

## ■ **La ofensiva internacional**

Aunque las acciones del régimen de Mugabe han provocado las críticas de los países occidentales, la Commonwealth, las Naciones Unidas y ONG, el apoyo que ha recibido por parte de los demás gobiernos africanos, la Unión Africana (UA) y la Southern African Development Community (SADC) ha sido constante y prácticamente unánime. Las razones de este comportamiento son múltiples.<sup>35</sup> De acuerdo con sus principios y, sobre todo, con su práctica, la UA no desea intervenir en los asuntos internos de sus estados miembros, y ha mostrado una tendencia clara a proteger los intereses de las autoridades. En el caso de la SADC, muchos de los gobiernos de la región tienen lazos históricos y alianzas estratégicas con la ZANU-PF, que

---

se remontan a la época de las guerras de independencia. La Swapo en Namibia, el Frelimo en Mozambique y el MPLA colaboraron durante décadas en la lucha contra los gobiernos coloniales o contra guerrillas disidentes. Además, Angola y Namibia han enviado sus tropas junto a las de Zimbabue a la RDC en apoyo de Laurent Kabila y, posteriormente, de su hijo y actual presidente Joseph.

En la región austral, los diferentes movimientos nacionalistas que llegaron al poder con la independencia han desarrollado una ideología de legitimación de los respectivos gobiernos muy parecida a la de la ZANU-PF: el derecho a gobernar se ha ganado en la lucha anticolonial, la «nación», el Estado y el partido son prácticamente sinónimos, y cualquier crítica es una muestra de «deslealtad» y falta de patriotismo. El antecedente de una oposición democrática que desbancase del poder al partido de la liberación, o de una intervención de los estados vecinos a favor del respeto de las normas democráticas no es especialmente bienvenido en la región. De hecho, la impresión general es que los gobiernos e instituciones africanas han optado por la defensa colectiva y corporativa de aquellos que detentan el poder en cada Estado, sean cuales sean las circunstancias, frente a la doble amenaza de la disidencia interna y la presión internacional.

En línea con los postulados de la ZANU-PF, para justificar su postura los diversos jefes de Estado africanos han invocado alternativamente el respeto a la soberanía nacional de Zimbabue y la legitimidad de la reforma agraria como estrategia de lucha antiimperialista. En este aspecto, han contado con el apoyo de ciertos sectores intelectuales africanos y occidentales que combinan la creencia en la legitimidad de Mugabe como líder anticolonial, el deseo de una reforma agraria radical a casi cualquier precio, la consideración de cualquier intervención o opinión occidental sobre los asuntos de un Estado africano como un acto de imperialismo y la visión de los derechos humanos como algo impuesto desde Occidente o, cuando menos, secundario frente a la redistribución económica.<sup>36</sup>

Este apoyo monolítico africano debe ser matizado. En el ámbito gubernamental, algunos países han mostrado de forma más o menos velada su disgusto por los acontecimientos en Zimbabue: Botsuana y Zambia han sido los más claros. Es de destacar, además, que ningún otro país ha optado por seguir las mismas políticas de Mugabe y que, de hecho, diversos gobiernos han intentado atraer a los granjeros blancos desplazados, especialmente en Mozambique, Zambia y Nigeria. En el ámbito de la sociedad civil, muchas personalidades africanas –como Desmond Tutu y Wole Soyinka– no han tenido reparos en condenar al régimen zimbabuano, igual como lo ha hecho una buena parte de la prensa del continente y un número cada vez mayor de asociaciones y sindicatos.

---

## ■ El calvario del MDC

Los últimos ocho años han sido muy difíciles para el principal partido de la oposición en Zimbabwe. Sometido a la represión constante por parte del régimen, con escasas posibilidades de conseguir la protección de unos tribunales cada vez más sometidos a las directivas del gobierno, confrontado a las repetidas manipulaciones de los resultados electorales y sin apoyos significativos en los países vecinos, el MDC ha visto como se le cerraban todas las opciones de acceso pacífico al poder.

De todas formas, a la comprensible desesperación ante las maniobras del régimen se han sumado con frecuencia las divisiones internas y los errores en la dirección. Su líder, Morgan Tsvangirai, disfrutaba de una enorme popularidad, fundamentada en su trayectoria a la cabeza del ZCTU en los años 90 y su crítica sin complejos al sistema político.<sup>37</sup> Pero, una vez las elecciones presidenciales de 2002 mostraron la imposibilidad de obtener una victoria electoral, las decisiones de Tsvangirai no siempre han sido las más acertadas y las discrepancias en la ejecutiva del partido han aumentado. En el año 2003, la campaña de protestas bautizada como «final push» y que pretendía colapsar al régimen con huelgas y manifestaciones tuvo un éxito muy limitado. Y, desde entonces, la represión brutal de cualquier acto de protesta y la evidencia de su inutilidad han minado la capacidad de movilización del MDC. La poca efectividad de las tácticas del partido y la manipulación por parte de las autoridades provocaron la disminución del voto del MDC en las elecciones legislativas de 2005 y la pérdida de diversos escaños.

Entonces, en octubre de 2005, Mugabe anunció la creación de un Senado o segunda cámara parlamentaria. En el MDC la propuesta provocó una fuerte disputa entre los partidarios de boicotear las elecciones a la nueva institución, encabezados por Tsvangirai, y los que no querían dejar a la ZANU-PF el control total del Senado, postura defendida por Welshman Ncube, el secretario general del partido. En una votación muy ajustada, el MDC optó por participar, pero Tsvangirai usó su voto calidad como presidente para bloquear la decisión y optar por el boicot. Esta medida fue el detonante de la escisión del partido, y Ncube y parte de los parlamentarios y oficiales del MDC decidieron crear una nueva formación política y ofrecerle la dirección a Arthur Mutambara, un académico. En la escisión se puede detectar también un cierto componente étnico, puesto que Ncube es un ndebele y el nuevo MDC escindido recoge la mayor parte de su apoyo en Matabeleland, mientras Tsvangirai es un shona originario de la provincia de Manyika.

Desde entonces las acusaciones de autoritarismo y mala gestión sobre Tsvangirai no han cesado, mientras la oposición se mostraba más débil frente al régimen, y las asociaciones que habían apoyado al MDC se distanciaban más de su dirección. En 2007, la crisis se agudizó cuando Tsvangirai decidió expulsar a la presidenta de la



---

Asamblea de Mujeres del MDC y sustituirla por una amiga de su familia. A pesar de todo, los resultados de las elecciones de marzo parecen indicar claramente que Tsvangirai ha conservado una fuerte dosis de popularidad, sobre todo entre los trabajadores urbanos, y que tanto él como el MDC siguen siendo para el electorado la alternativa más plausible a la ZANU-PF.

## ■ Las elecciones de 2008

---

La ruta hacia las elecciones presidenciales de marzo de 2008 empezó a configurarse casi un año antes. En marzo de 2007, Tsvangirai fue arrestado y golpeado por las fuerzas de seguridad. Las imágenes del maltratado líder del MDC aparecieron en todos los noticieros internacionales y provocaron una intensificación de la presión diplomática sobre Zimbabue y los países de la región. La SADC decidió convocar una cumbre extraordinaria en Dar es Salaam, donde el presidente sudafricano, Thabo Mbeki fue nombrado mediador para intentar buscar una salida negociada a la crisis. La elección de Mbeki era una medida claramente favorable a los postulados de Mugabe, puesto que, desde el año 2000, Suráfrica ha mostrado un apoyo constante al régimen de Harare y ha bloqueado todos los intentos de presionarlo o sancionarlo y, además, es conocida la mala opinión que Mbeki tiene del MDC y Tsvangirai.<sup>38</sup>

A lo largo de varios meses, Mbeki ha dirigido un proceso negociador que empezó a dar sus frutos en septiembre de 2007. La ZANU-PF y el MDC acordaron entonces la Enmienda Constitucional 18, que unificaba la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas para 2008.<sup>39</sup> Tsvangirai fue muy criticado dentro y fuera del país por aceptar este acuerdo, que contemplaba la posibilidad de que el presidente nombrase a su sucesor sin necesidad de nuevas elecciones –una cuestión importante para Mugabe, que tiene 84 años, y podría no acabar un posible nuevo mandato–, y eliminaba los 30 diputados que el presidente nombraba en el Asamblea Nacional, pero le autorizaba a nombrar a más de 30 de los 90 senadores. Mbeki arrancó del Gobierno la promesa de relajar las cláusulas más extremas de las leyes de prensa, opinión, actividades políticas, etc.

La fragilidad de los acuerdos y la buena fe negociadora de la ZANU-PF quedaron de manifiesto cuando en noviembre de 2007, ante la pasividad de Mbeki, el Gobierno zimbabuano anunció unilateralmente que Mugabe había nombrado la Zimbabwe Electoral Commission (ZEC), que así quedaba bajo los dictados del régimen y era la encargada de delimitar las circunscripciones electorales.<sup>40</sup> Poco después, Mugabe declaraba que las elecciones tendrían lugar en marzo de 2008, cuando el equipo negociador del MDC seguía reclamando un aplazamiento hasta finales de año.

---

En febrero de 2008, Simba Makoni, un alto cargo de la ZANU-PF y ex ministro de Finanzas entre 2000 y 2002, anunciaba que se presentaba como candidato independiente a las elecciones. Makoni, que inició una serie de ataques contra sus antiguos colegas, recibió el apoyo de diversos dirigentes del partido gobernante, y todos los rumores indican que su candidatura contaba con la aprobación de la vicepresidenta Joyce Mujuru y su esposo, el antiguo jefe del Ejército, Solomon Mujuru. Los Mujuru hace años que ejercen un poder importante dentro de la ZANU-PF y maniobran para conseguir que Joyce sea elegida sucesora de Mugabe, contra los deseos del mismo presidente. Según los resultados conocidos hasta ahora, el impacto electoral de Makoni no ha sido destacable.<sup>41</sup>

En los meses previos a las elecciones, la ZANU-PF y el Gobierno redujeron el clima de violencia en comparación con los comicios de 2002 y 2005, probablemente en un gesto hacia el mediador surafricano. Pero mantuvieron las bases de su acción en ocasiones previas: una combinación de intimidación, medidas populistas para atraer al electorado, y maniobras legislativas a favor del partido gobernante. Los veteranos y las milicias de la ZANU-PF continuaron atacando y amenazando a los simpatizantes del MDC, el Gobierno negó la ayuda alimentaria a las comunidades sospechosas de votar a la oposición, y los jefes militares anunciaron que no aceptarían una derrota de Mugabe. Paralelamente, la ZEC trazó unos distritos electorales que sobrerrepresentaban a los feudos rurales de la ZANU-PF y reducían el impacto de las áreas urbanas, cercanas al MDC. Se imprimieron 3 millones de papeletas electorales más que el número total de posibles votantes, y se abrieron menos colegios electorales en las ciudades con el objetivo de dificultar el voto urbano. Los residentes en el extranjero siguen sin poder votar. Mugabe puso en marcha un programa de distribución de tractores y otra maquinaria agrícola en las zonas rurales, ligando de forma abierta la recepción de los vehículos con el voto a la ZANU-PF.<sup>42</sup> Y, justo antes de las elecciones, el Parlamento aprobó una ley que obliga a todas las empresas del país a traspasar el 51% de sus acciones a zimbabuanos «indígenas». Esta medida, que si se aplica provocará una crisis aún mayor en la economía del país, pretende legitimar de nuevo la política «redistributiva» del régimen y abrir al acaparamiento de la elite gobernante todos los sectores de la economía, no sólo las granjas.<sup>43</sup>

---

## ■ Conclusión

A la espera de conocer los resultados finales de las elecciones o, para ser más exactos, los resultados que el Gobierno decidirá hacer públicos, este artículo ha intentado facilitar la comprensión de los acontecimientos en Zimbabue desde finales de los años 90. Para ello, es importante comprender la racionalidad que se encuentra detrás de unas medidas políticas y, especialmente, económicas que pueden pa-

recer y han sido calificadas frecuentemente de «irracionales». El proceso de destrucción sistemática de la economía y las instituciones de Zimbabue puesto en marcha por su propio Gobierno, aunque a veces es fruto de la improvisación y la ineptitud de sus dirigentes, con mucha más frecuencia forma parte de un programa de mantenimiento del poder y de acumulación masiva de los recursos económicos por parte de la elite ligada al régimen. Frente al imperativo de la preservación del monopolio sobre el poder político y la posibilidad que ofrece de acaparar ingresos y propiedades, la productividad de la economía, el funcionamiento eficiente de la administración, la construcción de un sistema educativo y sanitario decente, o la sostenibilidad futura de todo el sistema económico son totalmente secundarios. De hecho, a menudo una economía en crecimiento y una administración eficaz son vistos como contrarios a los objetivos últimos del régimen. Las consecuencias de la expansión de la economía privada y de un funcionariado independiente –empresas privadas no ligadas al Gobierno, fuentes de ingresos y salarios que no pasan por el patronazgo de la ZANU-PF, mecanismos constitucionales e instituciones independientes (tribunales, etc) que restringen la libertad de acción del gobierno, una clase media no dependiente del clientelismo– se consideran una amenaza directa a la supervivencia del régimen y un límite intolerable a su capacidad de facilitar la acumulación de recursos.

El caso de Zimbabue nos ilustra de forma clara sobre las consecuencias que se pueden esperar cuando la lógica política y financiera de un Gobierno y una elite van en la dirección completamente opuesta a la búsqueda más mínima de la mejora de la economía, de la buena gestión institucional, del respeto a los derechos de los ciudadanos y de su bienestar. Cuando esto está acompañado de una coartada ideológica con un cierto grado de aceptación –en este caso la «soberanía nacional», la lucha contra el «imperialismo» y la expropiación de los bienes de la minoría blanca del país– y de un apoyo casi incondicional de los demás estados africanos, la capacidad de pervivencia del régimen puede ser muy grande y, por tanto, la llegada del año cero para Zimbabue puede estar aún lejos.

1. Entre una voluminosa bibliografía sobre el Zimbabue independiente podemos destacar HERBST, Jeffrey. *State Politics in Zimbabwe*. University of Zimbabwe Publications. Harare. 2000 (1ª edición, 1990); BALANS, J.L. y LAFON, M. (dir). *Le Zimbabwe contemporain*. Karthala-IFRA. París. 1995; y STONE-MAN, C. & CLIFFE, L. *Zimbabwe. Politics, Economics and Society*. Pinter Publishers. Londres. 1989.
2. La comunidad blanca local, que disfrutaba de un gobierno autónomo desde 1923, había declarado unilateralmente la independencia del Reino Unido en 1965, en un intento de monopolizar el control del Estado y evitar el traspaso del poder de Londres a la mayoría africana.
3. BARNES, Teresa. «'History has to Play its Role': Constructions of Race and Reconciliation in Secondary School Historiography in Zimbabwe, 1980-2002». *Journal of Southern African Studies*. Vol. 33.

---

nº3. Septiembre. 2007. pp. 633-651.

4. Para un análisis de la violencia dentro de las guerrillas y de la coacción de la población rural durante los años de la guerra anticolonial, se pueden consultar KRIGER, Norma. *Zimbabwe's Guerrilla War. Peasant Voices*; y los dos volúmenes editados por Ngwabi BHEBE y Terence RANGER: *Soldiers in Zimbabwe's Liberation War*. James Currey. Londres. 1995 y *Society in Zimbabwe's Liberation War*. James Currey. Londres. 1996.

5. Sobre la represión en Matabeleland, ver RANGER, Terence. *Voices from the Rocks. Nature, Culture and History in the Matopos Hills of Zimbabwe*. James Currey Publishers. Oxford. 1999. y ALEXANDER, J.; MCGREGOR, J. & RANGER, T. *Violence and Memory. One Hundred Years in the «Dark Forests» of Matabeleland*. James Currey Publishers. Oxford. 2000.

6. DANSEREAU, Suzanne. «Liberation and Opposition in Zimbabwe», en MELBER, Henning (ed). *Limits to Liberation in Southern Africa. The Unfinished Business of Democratic Consolidation*. Human Sciences Research Council. Ciudad del Cabo. 2003. pp. 23-46.

7. Sobre la política agraria en Zimbabwe podemos destacar DRINKWATER, M. *The State and Agrarian Change in Zimbabwe's Communal Areas*. Macmillan. Londres. 1991; MOYO, Sam. *The Land Question in Zimbabwe*. Sapes Books. Harare. 1995; RUKUNI, M. & EICHER, C.K. (eds). *Zimbabwe's Agricultural Revolution*. University of Zimbabwe Publications. Harare. 1994; ZAMPONI, Mario. *Terra, produzione e lavoro. Storia agraria dell'Africa australe. Il caso dello Zimbabwe*. AIEP Editore. República de San Marino. 2001; KARUUOMBE, Barney. «A Comparative Analysis of Land Reform in Namibia and Zimbabwe». M.A. Thesis. University of Manchester. 2000; ALEXANDER, Jocelyn. «The Unsettled Land: The Politics of Land Redistribution in Matabeleland, 1980-1990». *Journal of Southern African Studies*. Vol.17. nº 4. Diciembre. 1991. pp. 581-610 y PALMER, Robin. «Land Reform in Zimbabwe, 1980-1990». *African Affairs*. Vol. 89. nº 355. 1990. pp. 163-181. Nosotros hemos tratado el tema de forma más exhaustiva en un número previo de esta revista: GARGALLO, Eduard. «El conflicto por la tierra en Zimbabwe: antecedentes históricos y perspectivas de futuro». *Nova Africa*. nº 3. Enero. 1998.

8. Para una valoración de los resultados de la reforma agraria, ver SACHIKONYE, L.M. «Land Reform in Namibia and Zimbabwe: A Comparative Perspective», en HUNTER, Justine (ed). *Who Should Own the Land? Analysis and Views on Land Reform and the Land Question in Namibia and Southern Africa*. Konrad Adenauer-Stiftung y Namibia Institute for Democracy. Windhoek. 2004. pp. 64-82, y HOOGEVEEN, J.G.M. & KINSEY, B.H. «Land Reform, Growth and Equity: Emerging Evidence from Zimbabwe's Resettlement Programme – A Sequel». *Journal of Southern African Studies*. Vol. 27. nº 1. Marzo. 2001. pp. 127-136.

9. Sobre la evolución de las Cas, ver RUKUNI, Mandivamba. «The evolution of agricultural policy: 1980-1990» y MUIR, Kay. «Agriculture in Zimbabwe», ambos en RUKUNI & EICHER. *op. cit.* pp. 15-39 y 40-55, respectivamente.

10. Para un estudio detallado, y excesivamente crítico en algunos puntos, del ESAP ver MLAMBO, A.S. *The Estructural Adjustment Programme: The Case of Zimbabwe, 1990-1995*. University of Zimbabwe Publications. Harare. 1997.

11. La descripción de los acontecimientos ocurridos entre 1997 y 2000 está basada sobre todo en DANSEREAU. *op. cit.* y SADOWBA, Wilbert Z. & ANDREW, Nancy. «Challenging the Limits of the State's Market-Based Land Resettlement Programme in Zimbabwe: The War Veterans as Catalyst of the Land Movement». Paper presented at the International Conference on Land, Poverty, Social Justice and De-

- 
- velopment. Institute of Social Studies. La Haya. 9-14 Enero, 2006.
12. Zimbabue intervino en la RDC en apoyo del Gobierno de Laurent Kabila y en concertación con sus aliados Angola y Namibia. Las guerrillas opuestas a Kabila contaban con el apoyo de Ruanda y Uganda.
13. En esos momentos, el Parlamento de Zimbabue constaba de 120 diputados electos y 30 nombrados por el presidente (jefes tradicionales y gobernadores regionales).
14. SCARNECCHIA, Timothy. «The 'Fascist Cycle' in Zimbabwe, 2000-2005». *Journal of Southern African Studies*. Vol. 32. n 2. Junio. 2006. pp. 221-237.
15. Sobre las ocupaciones de las granjas, ver SACHIKONYE *op. cit.* pp.76-78 y el informe *Adding Insult to Injury. A Preliminary Report on Human Rights Violations on Commercial Farms, 2000 to 2005*. Zimbabwe Human Rights NGO Forum and Justice for Agriculture Trust in Zimbabwe. Junio. 2007.
16. DANSEREAU. *op. cit.* pp. 39-41.
17. Los resultados fueron: Robert Mugabe, 1.685.212 votos y Morgan Tsvangirai, 1.258.401.
18. *The Mail and Guardian*. 16 de abril de 2007.
19. *IRIN News*. 31 de mayo de 2007.
20. La descripción de la ideología oficial está basada sobre todo en SCARNECCHIA. *op. cit.* pp. 227-228 y 234-235, y en KAMETE, Amin. «In Defence of National Sovereignty? Urban Governance and Democracy in Zimbabwe», en MELBER. *op. cit.* pp.47-71.
21. La política educativa del régimen está descrita en BARNES. *op.cit.* y RANGER, Terence. «Nationalist Historiography, Patriotic History and the History of the Nation: the Struggle over the Past in Zimbabwe». *Journal of Southern African Studies*. Vol. 30. n° 2. Junio. 2004. pp. 215-234.
22. Stan Mudenge es un historiador, autor del libro básico sobre el reino del Monomotapa, y ministro de Exteriores; Jonathan Moyo es un académico y analista político, muy crítico con la ZANU-PF hasta que a finales de los años 90 fue cooptado por el régimen y se encargó de imponer las medidas contra la libertad de prensa y de opinión; Ibbo Mandaza ha escrito y coordinado múltiples publicaciones sobre la política y la economía del país; y Tafataona Mahoso es el presidente de la Media Commission.
23. La evolución de la política urbana en Zimbabue está basada en KAMETE. 2005. *op. cit.* y KAMETE, Amin. «The Return of the Jettisoned: ZANU-PF's Crack at 'Re-Urbanising' in Harare». *Journal of Southern African Studies*. Vol. 32. n° 2. Junio. 2006. pp. 255-271.
24. La Operación Murambatsvina ha sido analizada por POTTS, Deborah. «'Restoring Order'?: Operation Murambatsvina and the Urban Crisis in Zimbabwe». *Journal of Southern African Studies*. Vol. 32. n° 2. Junio. 2006. pp. 273-291.
25. Las ocupaciones de las granjas y sus consecuencias están descritas en SACHIKONYE. *op.cit.* pp.75-78; SADOMBA & ANDREW. *op. cit.* pp. 11-19; y en *Adding Insult to Injury*.
26. ZAMPONI. *op. cit.* p.190.
27. SACHIKONYE. *op. cit.* p. 76.
28. *IRIN News*. 5 de junio de 2007.
29. Sobre los ataques a los trabajadores de las granjas se puede ver RUTHERFORD, B.A. *Working on the Margins. Black workers, white farmers in postcolonial Zimbabwe*. Weaver Press. Harare. 2001; y sobre su situación a partir de 2000-2001, SACHIKONYE, *op. cit.* pp.76-77 y *Adding Insult to Injury*.
30. Deborah Potts cuestiona, con razón, la validez de esta estadística de paro, puesto que implica considerar que el 80% de la población no trabaja en absoluto, es decir, no se tiene en cuenta a las personas que se dedican a la economía informal o a la agricultura de subsistencia. De todas formas, la cifra sigue
-

---

siendo indicativa del hundimiento de la economía del país, especialmente cuando la misma Potts indica que el porcentaje de asalariados en el sector formal en Zimbabwe antes de la crisis era uno de los más altos del continente. Ver POTTS. *op. cit.* pp. 287-290.

31. *Mining Weekly*. 23 de julio de 2007.

32. Sobre la política de conservación del Zimbabwe independiente ver DUFFY, Rosalyn. *Killing for Conservation. Wildlife Policy in Zimbabwe*. James Currey. Oxford. 2000. y SIBANDA, B.M.C. *Wildlife and Communities at the Crossroads: Is Zimbabwe's Campfire the Way Forward?* Sapes Books. Harare. 2001. Los últimos datos están extraídos de *The Standard*, 17 de junio de 2007.

33. *IRIN News*. 24 de julio de 2007.

34. Datos extraídos de POTTS. *op. cit.* p. 274; NCUBE, Trevor. «Mugabe: beginning of the end». *Mail and Guardian*. 28 de marzo al 3 de abril. 2008; y MCGREAL, Chris. «The true cost of living in Zimbabwe». *Mail and Guardian*. 14 al 19 de marzo de 2008.

35. Para un análisis crítico del papel de las instituciones y gobiernos regionales, ver RAFTOPOULOS, Brian. «How SADC failed Zimbabwe and the region». *Mail and Guardian*. 20 al 27 de marzo de 2008.

36. Sobre los apoyos de cierta intelectualidad a la política de Mugabe, ver RAFTOPOULOS, Brian. «The Zimbabwean Crisis and the Challenges for the Left». *Journal of Southern African Studies*. Vol 32. n° 2. Junio. 2006. pp. 203-219.

37. Para un breve perfil de Tsvangirai, ver MOYO, Gugulethu & NYATHI, Joram. «Brave, but fallible». *Mail and Guardian*. 20 al 27 de marzo de 2008.

38. Para el proceso negociador del último año, ver RAFTOPOULOS, 2008. *op. cit.*

39. *Business Day*. 20 de septiembre de 2007.

40. «A fight to the finish». *Mail and Guardian*. 9 al 15 de noviembre de 2007.

41. Para una biografía de Makoni, se pueden consultar sus anuncios de campaña en la prensa surafricana, que incluían su curriculum vitae. En este artículo no podemos adentrarnos en el análisis de las luchas de poder en el seno de la ZANU-PF. Las maniobras de los Mujuru parecen más una campaña por controlar el partido y la sucesión de Mugabe que una verdadera alternativa política. Los Mujuru acumulan la propiedad de más de 30 granjas, algunas obtenidas gracias a las ocupaciones ilegales de los últimos años, y han sido acusados de contrabando de diamantes. *The Cape Argus*. 26 de mayo de 2007.

42. Los meses previos a las elecciones en Zimbabwe han recibido una amplia cobertura en la prensa regional. Entre otros muchos artículos, se pueden consultar: «Zim: slips of free speech». *Mail and Guardian*. 7 al 13 de marzo de 2008; «Zim's urban vote may be crucial». *Mail and Guardian*. 14 al 19 de marzo de 2008; KASAMBALA, Tiseke. «If you show that you support MDC, you will starve» y RUPIYA, Martin. «When the generals say no», ambos en *Mail and Guardian*. 20 al 27 de marzo de 2008; ZUOMUYA, Percy, ROSSOUW, Mandy y MOYO, Jason. «And the winner is...». *Mail and Guardian*. 28 de marzo al 3 de abril de 2008; CHINAKA, Cris. «Mugabe's fist: vets, green bombers». *The Namibian*. 26 de marzo de 2008.

43. «Mugabe signs new black ownership law». *The Namibian*. 10 de marzo de 2008.